

TOCA DE APELACIÓN. No. AP-026/2023-P-1.

RECURRENTE: C. [REDACTED], PARTE ACTORA EN EL JUICIO DE ORIGEN.

MAGISTRADO PONENTE: DOCTOR JORGE ABDO FRANCIS.

VILLAHERMOSA, TABASCO. ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

VISTOS.- Para resolver los autos del toca relativo al Recurso de Apelación número **AP-026/2023-P-1**, interpuesto por la C. [REDACTED], en su carácter de parte actora en el juicio de origen, en contra de la **sentencia definitiva de diecisiete de enero de dos mil veintitrés**, dictada por la **Primera** Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dentro del expediente número **189/2020-S-1**, y,

1

RESULTANDO

1.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, el dos de marzo de dos mil veinte, la C. [REDACTED], por propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y Director de Prestaciones Socioeconómicas de dicho instituto, de quienes reclamó lo siguiente:

a) La nulidad del oficio número [REDACTED] de fecha 10 de febrero de 2020, mediante el cual la Dirección de Prestaciones socioeconómicas(sic) dependiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pretende aplicar de manera retroactiva la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco de fecha 01 de enero de 2016, al negar la regularización de la pensión por invalidez de la suscrita con respecto a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de fecha 01 de agosto de 1984, a la cual tengo derecho en virtud de haber sido dada de alta en fecha 16 de octubre de 1995, durante la vigencia de esta ley, así como por cumplir con lo establecido en el artículo 57 de la Ley abrogada.

b) La indebida cuantificación del monto de la pensión por invalidez que me fue otorgada a partir 31 de marzo de 2017, por la cantidad de **\$7,264.25(siete mil doscientos sesenta y cuatro 25/100 M.N.)** mensuales, por un porcentaje de 47.5%,

pensión que se me empezó a pagar a partir del 01 de junio de 2017.

c) El monto correcto respecto de la pensión por invalidez a que tengo derecho, es por el porcentaje de 73%, como se probará en su momento procesal oportuno.

2.- Admitida que fue en sus términos la demanda por la **Primera** Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a quien tocó conocer por turno del asunto, radicándolo bajo el número de expediente **189/2020-S-1**, y, substanciado que fue el juicio, mediante **sentencia definitiva** dictada el **diecisiete de enero de dos mil veintitrés**, se resolvió dicho juicio de conformidad con los siguientes puntos resolutivos:

“Primero.- La actora [REDACTED], no demostró su acción y las autoridades demandadas Director General y Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado, justificaron sus defensas conforme a las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta sentencia.

Segundo.- Se reconoce la LEGALIDAD del oficio [REDACTED], signado por el Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en términos de los dispuesto en el artículo 100 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa vigente.

Tercero.- Mediante oficio, remítanse copia certificada de la presente resolución, al Juzgado Septimo(sic) de Distrito en el Estado, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio número 2135/2022-IV-8.”

3.- Inconforme con el fallo definitivo antes referido, mediante escrito presentado ante este tribunal el ocho de febrero de dos mil veintitrés, la C. [REDACTED], en su carácter de parte actora en el juicio de origen, interpuso recurso de apelación, mismo que fue remitido a la Secretaría General de Acuerdos el día dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.

4.- Por acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente de este tribunal, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, a fin de que dentro del plazo de cinco días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, asimismo, se designó al Magistrado titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior, para el efecto de que formulara el proyecto de sentencia correspondiente.

5.- En diverso auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por desahogada la vista por parte de las autoridades enjuiciadas, en torno al recurso de apelación propuesto por la parte

actora, asimismo, se ordenó turnar el expediente al Magistrado Ponente, el cual fue recibido en la citada Ponencia el día veintinueve de mayo del año en curso, esto para formular el proyecto de sentencia respectivo, lo que así se realizó, por lo que se procede a emitir por este Pleno la presente sentencia:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL.- Este órgano colegiado es competente para conocer y resolver el presente **RECURSO DE APELACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, 109, 111 y 171, fracción XXII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete, en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado, número 7811.

SEGUNDO.- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.- Es procedente el recurso de apelación que se resuelve, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 111, fracción **II**, de la Ley de Justicia Administrativa vigente¹, en virtud de que la parte actora se inconforma de la **sentencia definitiva** de fecha **diecisiete de enero de dos mil veintitrés**, dictada por la **Primera Sala Unitaria** de este tribunal en el juicio **189/2020-S-1**.

Así también se desprende de autos (foja 168 del expediente principal), que la sentencia recurrida le fue notificada a la parte actora ahora recurrente el **veintitrés de enero de dos mil veintitrés**, por lo que el término de diez días hábiles para la interposición del recurso de trato que establece el citado artículo 111, en su último párrafo, transcurrió del **veinticinco de enero al ocho de febrero de dos mil veintitrés**², por lo que si el medio de impugnación fue presentado el **ocho de febrero de dos mil veintitrés**, en consecuencia, el recurso de trato se interpuso en tiempo.

TERCERO.- SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO Y DESAHOGO DE VISTA.- En estricta observancia a los principios

¹ "Artículo 111.- El recurso de apelación procederá en contra de:

(...)

II. Sentencias definitivas de las Salas.

(...)"

(Subrayado añadido)

² Descontándose del plazo anterior los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco y seis de febrero de dos mil veintitrés, por corresponder a sábados, domingos e inhábil, de conformidad con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente.

procesales de exhaustividad y congruencia que rigen las sentencias, conforme a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente, se procederá al análisis y resolución conjunta de los agravios de apelación, a través de los cuales la parte actora ahora recurrente expone, substancialmente, lo siguiente:

A) Que le causa agravio la sentencia recurrida, toda vez que la Sala dejó de respetar su derecho(sic) *pro homine* o *pro persona*, previsto en el artículo 1 constitucional, pues se afecta su derecho humano a la previsión social, en específico, a la pensión por invalidez, por lo que la aplicación de la norma debió obedecer a un ejercicio de ponderación en el que existiera una mayor aproximación a la finalidad de lograr la protección más amplia a su persona, realizando para tal efecto, una *inaplicación* de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco en vigor.

B) Que también es ilegal la sentencia combatida debido a que contraviene lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, pues de forma retroactiva, se aplican en su perjuicio las disposiciones de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco (vigente), cuando lo correcto era declarar la nulidad del acto impugnado y considerar aplicable al caso los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), por ser la norma que se encontraba vigente cuando la actora se dio de alta ante el instituto demandado.

C) Que además, es inhumano y degradante que a pesar de haber estado cotizando la suscrita durante años ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, conforme a la Ley del citado instituto de mil novecientos ochenta y cuatro, se le haya negado la regularización del pago de su pensión conforme a la citada ley, lo cual no fue considerado por la Sala del conocimiento.

D) Que la sentencia combatida no fue dictada en el marco constitucional de respeto a los derechos humanos, ni con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y específicamente, progresividad, último principio que implica un gradual progreso para lograr el cumplimiento pleno de los mencionados derechos humanos, toda vez que de la sentencia combatida se advierte que de ningún modo la sala unitaria estudió los argumentos señalados por la suscrita, tanto en su escrito inicial de demanda, como los del desahogo de vista en relación al oficio de contestación de demanda, al aplicar la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco del año dos mil dieciséis, para efectos de la pensión por invalidez y al negar la regularización y generar el pago por el 73% de su último salario, sino únicamente al 47.5% de este, convirtiéndose este acto inhumano y de explotación laboral.

- E) Que en todo caso, la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco vigente debió ser aplicada únicamente a los trabajadores que fueron dados de alta ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, cuando dicha norma entró en vigor, y no ser aplicada retroactivamente en su perjuicio, razón por la cual la sentencia combatida transgrede sus derechos humanos e implica que las determinaciones del instituto demandado están por encima de lo dispuesto en la constitución y los tratados internacionales en materia laboral, de seguridad y previsión social, pues el acto impugnado se dictó de manera arbitraria, desproporcionada, desigual, injusta y discriminatoria, lo cual no valoró la *a quo*.
- F) Que la Sala soslayó que la actora en su demanda planteó que fue dada de alta ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, sin embargo, la responsable calculó el pago de su pensión conforme a la vigente ley del citado instituto, lo cual es claramente violatorio de sus derechos humanos de seguridad social, previsión social, de los principios pro homine, pro persona, de irretroactividad de la ley, pues al momento de quedar abrogada la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de mil novecientos ochenta y cuatro la suscrita tenía un derecho en vías de ejecución, de ahí que en su lugar, se debieron resguardar y proteger sus derechos en vías de adquisición, al iniciar su servicio durante la vigencia de la multicitada ley del instituto de mil novecientos ochenta y cuatro.
- G) Que la sentencia es ilegal porque la Sala no realizó un análisis y concatenación de las pruebas ofrecidas, limitándose a resolver con base en lo expuesto por las autoridades en la contestación de demanda, sin tomar en cuenta los hechos que quedaron demostrados con las pruebas ofrecidas por la actora, así como tampoco consideró los argumentos de impugnación expresados en su demanda, dado que solicitó la nulidad del oficio número [REDACTED], por no resultar aplicable la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente y además, porque contrario a lo señalado por la autoridad, la actora fue dada de alta como servidor público el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco; por lo que, insiste, resulta en una total discriminación que no se le conceda la regularización de su pensión de acuerdo a la abrogada ley del citado instituto.
- H) Que en no se respetó lo establecido en el artículo 97, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, de ahí que la Sala no respetó las formalidades esenciales del procedimiento ni su derecho de audiencia, dado que no atendió las pruebas ofrecidas en su escrito demanda, ya que no se advierte el análisis y concatenación de las pruebas que refirió la *a quo* haber realizado, lo cual le causa agravio, aunado a que también se dejó de suplir la queja a su favor,

pues la *a quo* no se allegó de elementos probatorios incluso de manera oficiosa.

- l) Que también es ilegal la sentencia combatida, toda vez que la Sala dejó de atender a sus argumentos contenidos en el escrito de réplica de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, donde planteó: **1)** la falta de acreditación de la personalidad; **2)** la inaplicación de las tesis aisladas con las que la autoridad pretendió acreditar su personalidad; **3)** la obligación de todo compareciente de acreditar fehacientemente su personalidad; **4)** la incorrecta y unilateral certificación de los documentos ofrecidos por la autoridad para acreditar su personalidad, así como las pruebas ofrecidas; **5)** y la impugnación a las excepciones de la enjuiciada, sobre todo porque la denominada *sine action agis* no es una excepción y debió desecharse; así como su escrito de alegatos, por tal razón solicita se emita una sentencia nueva en la que se respeten los derechos de fundamentación, motivación y congruencia, acorde al principio *pro homine*.

6 Al respecto, **las autoridades demandadas**, al desahogar la vista que se les concedió por lo que hace al recurso que se resuelve, se limitaron a apoyar la sentencia combatida y sostuvieron que no existe violación a los derechos fundamentales a que alude la actora, toda vez que las autoridades demandadas al responder su solicitud expresó las razones de derecho y los motivos de hechos que considero que no le era aplicable la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

CUARTO.- SÍNTESIS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- En principio, del análisis que se hace a la **sentencia definitiva** recurrida de fecha **diecisiete de enero de dos mil veintitrés**, se puede apreciar que la Sala responsable apoyó su decisión, medularmente, en los siguientes razonamientos:

- En principio, indicó que la parte **actora** ofreció como pruebas de su parte: **1)** copia de la credencial para votar expedida a nombre de la ciudadana [REDACTED], por el Instituto Nacional Electoral, con la que demuestra la personalidad que ostenta; **2)** copia de la Constancia de la Clave única de Registro de Población (CURP) con número [REDACTED], expedida a nombre de la actora [REDACTED], con la que acredita su identidad; **3)** copia del recibo de pago, del periodo comprendido del dieciséis de octubre al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación dependiente del Gobierno del Estado de Tabasco, con lo que se demuestra tener una relación laboral con la Secretaría de Educación, en la cual se le realizó un pago por la prestación de servicio; **4)** copia del recibo de pago, del periodo comprendido del dieciséis al treinta de marzo de dos mil diecisiete, expedida a

nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco; **5)** copia del comprobante de pago de pensión por invalidez correspondiente del uno al treinta y uno de enero de dos mil veinte, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con la que acredita el pago de la cantidad de su pensión de invalidez que le fue otorgado; **6)** original del oficio [REDACTED] de fecha diez de febrero de dos mil veinte, firmado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dirigido a la ciudadana [REDACTED], donde se otorga la respuesta a su escrito de inconformidad respecto al monto de pago de pensión, con la que demuestra el acto reclamado; **7)** original de la pensión por invalidez, de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, otorgada a la parte actora, por el Director Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **8)** copia simple del escrito de siete de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por la derechohabiente [REDACTED], y dirigido al Titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, misma que contiene inconformidad respecto al monto que el instituto le determinó como pago de pensión por invalidez; **9)** copia del formato D.R.H. de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con la que demuestra la baja del servicio por invalidez; **10)** original de la hoja de registro de la demanda de amparo indirecto, con sello de recibido el nueve de diciembre de dos mil veinte, promovido por la actora [REDACTED]; **11)** copia del acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, derivado del juicio de amparo número 2096/2019 y sus anexos, donde se concede vista a la actora de los oficios números [REDACTED], respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y **12)** original de la constancia de antigüedad laboral a nombre de la accionante, expedido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

- Que no obstante de ser objetadas por la parte demandada, se le concedió pleno valor, pues se encuentran administradas entre sí y relacionadas con todos los hechos de la demanda y de lo expresado en la contestación producida por las autoridades responsables, de ahí que no sean documentos aislados, ni su valor sea nulo por haber exhibido algún documento en copia simple.
- Por otro lado, indicó que las autoridades demandadas ofrecieron de su parte: **a)** copia del acta de nacimiento número [REDACTED], con fecha de registro el veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y uno, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la oficialía del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; **b)** copia certificada del memorándum [REDACTED], de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, firmado por el Director

de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado, y dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado, que contiene informe solicitado; **c)** copia certificada de la cedula de historial de cotización con número de folio de tramite [REDACTED], expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Subdirección de Prestaciones Socioeconómicas y Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **d)** copia del recibo de pago número [REDACTED], del periodo del dieciséis al treinta de marzo de dos mil diecisiete, expedida a nombre de la actora, por la Secretaría de Educación del Estado; **e)** copia certificada del oficio número [REDACTED], de fecha dos de diciembre dos mil veinte, signado por el Subdirector de Servicios Tecnológicos y Modernización del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del citado instituto; **f)** copia certificada de los comprobante fiscal digital por internet, correspondiente a las percepciones y deducciones de los meses de uno de enero y febrero de dos mil veinte, expedido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a nombre de la actora Cecilia Jiménez Escobar; **g)** copia certificada del pago de pensión por invalidez de los meses de enero y febrero de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, constante de dos recibos de pago expedidos a nombre de la actora, por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **h)** copia certificada del pago de gratificación de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, expedidos a nombre de la actora, por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, constante de nueve recibos de pagos; **i)** la instrumental de actuaciones; y **j)** la presuncional legal y humana.

8

- Pruebas a las que se les concedió valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en relación con diversos preceptos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, al no haber sido objetadas por la accionante.
- Que del análisis de las pruebas ofrecidas por las partes y que obran en autos, y analizadas las manifestaciones formuladas por la parte actora en su escrito de demanda, así como lo sustentado por las enjuiciadas en su contestación, refirió que fue **legal** que a través del acto impugnado consistente en el **oficio** [REDACTED] [REDACTED] de fecha diez de febrero de dos mil veinte, expedido por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se **negara la regularización de la pensión por invalidez**, por el porcentaje aplicado del 47.5%, que le fue otorgada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, al señalarse que sólo se encontraba en una expectativa de derecho y no de derecho adquirido, de conformidad al numeral 90 de la Ley de Seguridad Social del Estado, por tanto es improcedente que se le reconociera el 73% que solicita, pues la actora inicio su servicio activo el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco y su baja fue con fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, tal como se

corroborada de autos, por lo que debe apegarse a las nuevas disposiciones de la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

- Ello, toda vez que la parte actora, al momento que se encontraba vigente la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, abrogada, no hizo ninguna solicitud alguna ante el multicitado instituto, relacionado con alguna prestación que se encontraba en trámite, tal como lo dispone el transitorio tercero de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para estar en el supuesto del artículo 57 de la abrogada ley de multireferido instituto.

De lo sintetizado se puede desprender que la Sala Unitaria del conocimiento resolvió, en esencia, **reconocer la legalidad** del **acto impugnado** contenido en el oficio [REDACTED] de fecha **diez de febrero de dos mil veinte**, emitido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se le **negó la regularización de la pensión por invalidez**, por el porcentaje aplicado del 47.5%, que le fue otorgada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, al señalarse que sólo se encontraba en una expectativa de derecho y no de derecho adquirido, de conformidad al numeral 90 de la Ley de Seguridad Social del Estado, por tanto es improcedente que se le reconociera el 73% que solicita, pues la actora inició su servicio activo el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco y su baja fue con fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, tal como se corrobora de autos, por lo que debe apegarse a las nuevas disposiciones de la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

9

QUINTO.- ANÁLISIS DE LEGALIDAD.- CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- De conformidad con la síntesis de argumentos expuesta en el considerando anterior, este Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco determina que dichos argumentos son **parcialmente fundados pero insuficientes**, siendo procedente **confirmar** la **sentencia definitiva** recurrida, por las consideraciones siguientes:

En principio, se estima necesario tener presente el contenido de los artículos 96 y 97 de la Ley Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente, preceptos que son de la literalidad siguiente:

“Artículo 96.- El Magistrado Unitario, al pronunciar sentencia, suplirá las deficiencias de la demanda promovida por un particular, siempre y cuando de los hechos narrados se deduzca el concepto

de nulidad, sin analizar cuestiones que no fueron hechas valer y contrayéndose exclusivamente a los puntos de la litis planteada.

En materia registral, podrá revocarse la calificación del documento presentado a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuya inscripción haya sido denegada y esta última no sea competencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, sin que pueda la Sala Unitaria, en ningún caso, resolver sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales.

Artículo 97.- Las sentencias deberán contener:

I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, según el prudente arbitrio de la Sala;

II. La fijación clara y precisa de la autoridad responsable cuando se hubiera llamado a juicio a diversas autoridades por el mismo acto;

III. Los razonamientos lógico jurídicos, clara y sistemáticamente formulados, que sustenten la decisión final contenida en la sentencia;

IV. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;

V. Los puntos resolutive en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o cuya nulidad se declare; y

VI. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.

(Subrayado añadido)

De los preceptos previamente transcritos se puede obtener que éstos contienen los principios procesales de **congruencia** y **exhaustividad**, a la luz de los cuales se ha establecido que el juzgador, a través de la sentencia definitiva que emita, tiene la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, ocupándose, además, exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia del juicio, esto es, planteadas por las partes.

Además, que sólo se **podrá suplir la deficiencia de la demanda** promovida por un particular, siempre que de los acontecimientos narrados se deduzca el concepto de nulidad, sin analizar cuestiones que no fueron hechas valer y contrayéndose exclusivamente a los puntos de litis planteada.

Con base en lo anterior se dice que la sentencia debe, entre otros, ser **congruente**, no sólo consigo misma, sino también con la *litis*, tal y como haya quedado entablada en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, siendo ésta, aquella

característica que impone que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí, y, por otro lado, de congruencia externa, que en sí, atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la sentencia no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna pretensión que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio.

En ese sentido, tanto doctrinalmente como en la *praxis* jurídica, se ha reconocido que la *litis* en un juicio debe quedar fijada por las **pretensiones** contenidas en el escrito de demanda, así como las **refutaciones** de la contestación a la misma, ello a la luz del **acto impugnado**.

Sirven de sustento a lo anterior, las tesis **sin número, 1a./J. 104/2004** y **I.6o.C.391 C**, emitidas por la entonces Cuarta y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sexta y novena épocas, volumen LXXXIX, quinta parte, tomos XXI y XXIII, enero de dos mil cinco y febrero de dos mil seis, páginas 18, 186 y 1835, registros digitales 273640, 179549 y 175900, respectivamente, que son del contenido siguiente:

“LITIS, FIJACION DE LA. La controversia se fija con la demanda y la contestación, sin que sea lícito que alguna de las partes, después de ese momento procesal, deduzca pretensiones distintas de las que integraron los puntos en litigio, pues lo contrario implicaría un estado de indefensión para la contraria.”

“LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Si en el auto admisorio de la demanda no se mencionan todas las acciones hechas valer por la parte actora en el escrito relativo, el hecho de no impugnarlo no implica el consentimiento de que sólo las acciones comprendidas en ese auto serán materia de la *litis*, pues estimar lo contrario significaría que el Juez es quien plantea la controversia, lo cual es inadmisibles, porque la determinación de los puntos litigiosos en un proceso no corresponde al juzgador, sino a las partes. En efecto, de acuerdo con los artículos 28 y 87, así como los diversos 478 y 479 de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, respectivamente, el litigio u objeto del proceso se fija a partir de las pretensiones expresadas en los escritos de demanda y contestación y, en su caso, de reconvenición y contestación a ésta, así como en el de desahogo

de la vista que se dé con las excepciones y defensas opuestas, correspondiendo al Juez tomar en cuenta todo lo que plantean las partes para poder resolver el litigio, independientemente de que se comprenda o no en el auto que admite la demanda, para que, de esta manera, se cumpla con los principios de completitud de las sentencias, establecido por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de congruencia de las mismas, conforme a los cuales, se debe resolver sobre todo lo efectivamente planteado por las partes.”

“LITIS. CONCEPTO ESTRICTO DE ESTA INSTITUCIÓN PROCESAL EN EL DERECHO MODERNO. El concepto de litis que contienen los diccionarios no especializados en derecho lo derivan de lite, que significa pleito, litigio judicial, actuación en juicio, pero tales conceptos no satisfacen plenamente nuestras instituciones jurídicas porque no es totalmente exacto que toda litis contenga un pleito o controversia, pues se omiten situaciones procesales como el allanamiento o la confesión total de la demanda y pretensiones en que la instancia se agota sin mayores trámites procesales y se pronuncia sentencia, que sin duda será condenatoria en la extensión de lo reclamado y por ello, se puede decir válidamente que no hay litis cuando no se plantea contradictorio alguno. Luego, se deberá entender por litis, el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero, se estima necesario apuntar, que es con la contestación a la demanda cuando la litis o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del Juez. Lo expuesto es corroborado por Francisco Carnelutti, quien al referirse al litigio, lo define como el conflicto de intereses, calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Es menester señalar que la litis del proceso moderno o sea, la determinación de las cuestiones litigiosas, como uno de los efectos de la relación procesal, presenta notas características tales que, producida la contestación, el actor no puede variar su demanda, ni el demandado sus defensas, salvo algunas excepciones; por consiguiente, en términos generales, integrada la litis, las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. Viene al caso tratar el tema de demanda nueva y hecho nuevo, entendiéndose aquélla como una pretensión distinta, relacionada con el objeto de la acción, mientras que el hecho nuevo se refiere a la causa y constituye un fundamento más de la acción deducida, por lo que cabe aclarar que la demanda nueva importa una acción distinta, mientras que el hecho nuevo, no supone un cambio de acción. Así, después de contestada la demanda, es inadmisibles una demanda nueva, pero por excepción, la ley permite que se alegue un hecho nuevo o desconocido, inclusive en la segunda instancia si es conducente al pleito que se haya ignorado antes o después del término de pruebas de la primera instancia. Tiene particular importancia saber si el actor ha variado su acción o el demandado sus defensas, o si el Juez se ha apartado en su fallo de los términos de la litis y para saberlo habrá que remitirse a las reglas establecidas para la identificación de las acciones. En efecto, hay modificación de la litis cuando varía alguno de los elementos de la acción: sujetos, objeto o causa, tanto respecto del actor como del demandado. Producida la demanda y la contestación, sobre ellas debe recaer el pronunciamiento, sin que el Juez, ni las partes puedan modificarla. En cuanto a la acusación de la rebeldía, tiene también sus consecuencias según la naturaleza del caso para la determinación de la litis. En lo que toca a los sujetos, debe destacarse que no podrá admitirse la intervención de terceros extraños a la litis; en lo que se refiere al objeto, después de contestada la demanda, el actor no puede retirarla o modificarla, ni ampliarla; por ejemplo, en los alegatos no pueden reclamarse intereses no pedidos en la

demanda; tampoco puede el actor aumentar el monto de lo demandado, ni ampliarlo si en la contestación de la demanda, el demandado no objetó el monto de lo reclamado. En relación con la causa, al igual que los anteriores elementos de la acción, no puede ser cambiada, modificada o ampliada; por ejemplo, el actor que ha defendido su calidad de propietario, no puede en los alegatos aducir el carácter de usuario o usufructuario, o si el demandado ha alegado la calidad de inquilino, no puede luego fundarse la acción pretendiendo que ha quedado demostrada su calidad de subarrendatario. En este orden de ideas, los Jueces al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no pueden ocuparse en la sentencia de puntos o cuestiones no comprendidas en la litis. Los puntos consentidos por las partes quedan eliminados de la discusión, así como de los que desistan. Para llegar a la justa interpretación de lo controvertido, el órgano jurisdiccional está facultado para ir más allá de los términos de la demanda y de la contestación y buscar en la prueba la exacta reconstrucción de los hechos, excluyendo sutilezas y atendiendo a la buena fe de las partes.”

(Subrayado añadido)

En ese orden de ideas, se tiene que del análisis **integral** de la demanda, la parte accionante impugnó, en esencia, el oficio [REDACTED] [REDACTED] de fecha **diez de febrero de dos mil veinte**, emitido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se le **negó la regularización de la pensión por invalidez**, por el porcentaje aplicado del 47.5%, que le fue otorgada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; al aducir la inconforme, esencialmente, que a la fecha que solicitó la pensión por invalidez contaba con más de veintiún años de servicio, por tanto la entrada en vigor de la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de dos mil dieciséis, ya contaba con quince años cumplidos, como lo establece el artículo 57 de la abrogada ley del citado instituto, a su decir sí cumple con los requisitos legales para obtener tal derecho subjetivo conforme a las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada).

De ahí que sus pretensiones consistían, esencialmente, en que la Sala del conocimiento declarara la ilegalidad del oficio referido y condenara a la autoridad demandada a declarar que la pensión por invalidez correspondía al 73%, y en consecuencia que realizara el pago retroactivo a la actora de la diferencia que resulte del porcentaje otorgado, así como de los incrementos señalados en el artículo 81 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco en vigor.

Finalmente, a fin de acreditar sus pretensiones, ofreció como pruebas de su parte: **1)** copia de la credencial para votar expedida a

14

nombre de la ciudadana [REDACTED], por el Instituto Nacional Electoral, con la que demuestra la personalidad que ostenta; **2)** copia de la Constancia de la Clave única de Registro de Población (CURP) con número [REDACTED], expedida a nombre de la actora [REDACTED], con la que acredita su identidad; **3)** copia del recibo de pago, del periodo comprendido del dieciséis de octubre al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación dependiente del Gobierno del Estado de Tabasco, con lo que se demuestra tener una relación laboral con la Secretaría de Educación, en la cual se le realizó un pago por la prestación de servicio; **4)** copia del recibo de pago, del periodo comprendido del dieciséis al treinta de marzo de dos mil diecisiete, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco; **5)** copia del comprobante de pago de pensión por invalidez correspondiente del uno al treinta y uno de enero de dos mil veinte, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con la que acredita el pago de la cantidad de su pensión de invalidez que le fue otorgado; **6)** original del oficio [REDACTED] de fecha diez de febrero de dos mil veinte, signado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dirigido a la ciudadana [REDACTED], donde se otorga la respuesta a su escrito de inconformidad respecto al monto de pago de pensión, con la que demuestra el acto reclamado; **7)** original de la pensión por invalidez, de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, otorgada a la parte actora, por el Director Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **8)** copia simple del escrito de siete de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por la derechohabiente [REDACTED], y dirigido al Titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, misma que contiene inconformidad respecto al monto que el instituto le determinó como pago de pensión por invalidez; **9)** copia del formato D.R.H. de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con la que demuestra la baja del servicio por invalidez; **10)** original de la hoja de registro de la demanda de amparo indirecto, con sello de recibido el nueve de diciembre de dos mil veinte, promovido por la actora [REDACTED]; **11)** copia del acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, derivado del juicio de amparo número 2096/2019 y sus anexos, donde se concede vista a la actora de los oficios números

██████████ y ██████████, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y 12) original de la constancia de antigüedad laboral a nombre de la accionante, expedido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

Así, admitida en sus términos la demanda y las pruebas ofrecidas por la parte actora, se tiene que mediante oficio presentado el once de diciembre de dos mil veinte -folio 48 del expediente principal-, las autoridades enjuiciadas formularon su **contestación a la demanda**, oponiendo las excepciones y defensas que estimaron procedentes (*sine action agis*, prescripción), sosteniendo la legalidad del oficio impugnado al referir que la parte actora, al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no contaba con un derecho adquirido en términos de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por tanto debía ajustarse a las disposiciones de la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Finalmente, para acreditar sus excepciones y defensas, ofreció como pruebas: **a)** copia del acta de nacimiento número ██████████, con fecha de registro el veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y uno, expedida a nombre de la actora ██████████, por la oficialía del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; **b)** copia certificada del memorándum ██████████, de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado, y dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado, que contiene informe solicitado; **c)** copia certificada de la cedula de historial de cotización con número de folio de tramite 2432, expedida a nombre de la actora ██████████, por la Subdirección de Prestaciones Socioeconómicas y Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **d)** copia del recibo de pago número ██████████, del periodo del dieciséis al treinta de marzo de dos mil diecisiete, expedida a nombre de la actora, por la Secretaría de Educación del Estado; **e)** copia certificada del oficio número ██████████, de fecha dos de diciembre dos mil veinte, signado por el Subdirector de Servicios Tecnológicos y Modernización del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del citado instituto; **f)** copia certificada de los comprobante fiscal digital por internet, correspondiente a las percepciones y deducciones de los meses de uno de enero y febrero de dos mil veinte, expedido por el Instituto de Seguridad Social

del Estado de Tabasco, a nombre de la actora [REDACTED];
g) copia certificada del pago de pensión por invalidez de los meses de enero y febrero de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, constante de dos recibos de pago expedidos a nombre de la actora, por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **h)** copia certificada del pago de gratificación de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, expedidos a nombre de la actora, por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, constante de nueve recibos de pagos; **i)** la instrumental de actuaciones; y **j)** la presuncional legal y humana.

Señalado lo anterior, es preciso indicar que la *litis* en el juicio contencioso administrativo de origen, se constriñó en analizar la legalidad del **oficio** [REDACTED] de fecha **diez de febrero de dos mil veinte**, emitido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se le **negó la regularización de la pensión por invalidez**, por el porcentaje aplicado del 47.5%, que le fue otorgada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a la luz de sus argumentos, en los que planteó, esencialmente, que a la fecha que solicitó la pensión por invalidez contaba con más de veintiún años de servicio, por tanto la entrada en vigor de la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de dos mil dieciséis, ya contaba con quince años cumplidos, como lo establece el artículo 57 de la abrogada ley del citado instituto, a su decir sí cumple con los requisitos legales para obtener tal derecho subjetivo conforme a las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada); siendo que por partida contraria, las enjuiciadas, en el acto impugnado y en su contestación a la demanda, sostuvieron que a la accionante, no le aplica el citado numeral por causar alta laboral el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, toda vez que, el artículo 66 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, señala que el derecho a la pensión de cualquier naturaleza nace cuando el asegurado a su beneficiarios se encuentran en los supuestos consignados en la referida ley y satisfagan los requisitos que la misma establece para tal finalidad, los cuales no reunió la parte actora; sin embargo, se ubicó en un supuesto para adquirir una pensión por invalidez al ser diagnosticada con una enfermedad de carácter ordinario, por tanto, corresponde determinar conforme a la tabla que dispone el artículo 90 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por ello no se le transgrede el principio de retroactividad de la ley consagrada en el numeral 14 constitucional, razón por la cual, debe sujetarse a las

nuevas disposiciones de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (vigente); por lo que la *litis* consistirá en determinar si la parte promovente acredita o no contar con el derecho adquirido de la regularización de la pensión por invalidez, ya sea con la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada (vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince) o con la nueva Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco (vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis).

Ahora bien, por razones de técnica y claridad, se procede a estudiar los argumentos de agravio del considerando **TERCERO**, en un orden diferente al planteado por la recurrente, sin que ello implique una contravención al principio de congruencia y exhaustividad.

Así, en principio, se estiman **parcialmente fundados pero insuficientes** aquellos sintetizados en el inciso **I)** del considerando **TERCERO**, a través de los cuales señala la inconforme que es ilegal la sentencia combatida, toda vez que la Sala dejó de atender al principio de exhaustividad y congruencia, dado que no analizó sus argumentos contenidos en el escrito de réplica de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, donde planteó: **1)** la falta de acreditación de la personalidad; **2)** la inaplicación de las tesis aisladas con las que la autoridad pretendió acreditar su personalidad; **3)** la obligación de todo compareciente de acreditar fehacientemente su personalidad; **4)** la incorrecta y unilateral certificación de los documentos ofrecidos por la autoridad para acreditar su personalidad, así como las pruebas ofrecidas; y **5)** la impugnación a las excepciones de la enjuiciada, sobre todo porque la denominada *sine action agis* no es una excepción y debió desecharse; así como su escrito de alegatos, por tal razón solicita se emita una sentencia nueva en la que se respeten los derechos de fundamentación, motivación y congruencia, acorde al principio *pro homine*.

Lo anterior se estima **fundado**, toda vez que de un análisis que se realiza al escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (visible a foja 85 a 98 del expediente de origen), se advierte que la parte actora desahogó la vista que se le otorgó respecto del oficio de contestación de demanda, en donde sostuvo, en esencia, los puntos de inconformidad antes identificados con los incisos **1) a 5)**, sin que al efecto, la Sala del conocimiento, a través de la sentencia que en esta vía se analiza, hubiere formulado un pronunciamiento expreso en el que atendiera cada uno de los tópicos antes detallados, aunado a que

también, pese a que con fecha ocho de junio de dos mil veintidós, se presentaron los alegatos de las partes, tal como lo sostiene la accionante, la Sala dejó de resolver de forma exhaustiva y congruente los puntos de inconformidad que le fueron planteados por las partes a través del juicio contencioso administrativo, en contravención a los preceptos 96 y 97 previamente analizados.

De ahí que este Pleno, por economía procesal, procede a pronunciarse de forma directa sobre los argumentos esgrimidos por la demandante, estimando que son **infundados** por insuficientes para revocar la sentencia combatida, pues por lo que hace a lo expuesto en los numerales **1) a 3)**, en los que, en esencia, se combate la falta de acreditación de la personalidad de la autoridad que compareció a contestar la demanda, son **infundados**, debido a que como se explicó previamente, las autoridades a la que reviste el carácter de demandadas en el juicio contencioso administrativo es el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco(sic) y el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, última autoridad por haber emitido el acto impugnado consistente en el oficio [REDACTED] de fecha **diez de febrero de dos mil veinte**; de ahí que si la contestación de demanda fue suscrita, por el Director General de ese ente y directamente por el propio Director de Prestaciones Socioeconómicas, como se advierte a foja 48 del expediente de origen, se tiene entonces que dichas autoridades, de conformidad con los artículos 37, fracción II, inciso c) y 51 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, sí contaban con la legitimación procesal pasiva para formular la contestación a la demanda a su nombre, al haber sido la autoridad administrativa **emisora** del acto que se tilda de ilegal en el juicio de origen, aunado a que el Director General es el representante legal de dicho ente público, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco³, y, por tanto, de todas sus unidades administrativas.

Lo anterior es así, pues, por una parte, el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, sí cuenta con facultades para comparecer a juicio a contestar la demanda a su propio nombre, pues de conformidad con lo expuesto, dicha autoridad fue la emisora del acto impugnado y, por tanto, cuenta con la facultad y obligación procesal de contestar la demanda,

³ "Artículo 26.- El Director General representará legalmente al ISSET y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

pues bajo el principio de derecho que reza “*a maiori ad minus*”, es decir, “el que puede lo más puede lo menos”, si es la autoridad demandada en el juicio, **con mayor razón** tiene el derecho y la obligación de defenderse de manera directa a través del juicio contencioso administrativo, pues cuenta con la legitimación procesal para tales efectos; y, por otro lado, el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, sí cuenta con facultades para comparecer a juicio a contestar la demanda a nombre y representación del ente público Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y, por tanto, bajo el mismo principio “*a maiori ad minus*”, **con mayor razón** cuenta con la facultad y obligación procesal de contestar la demanda a nombre de sus unidades jurídicas con la finalidad de defenderse a través del juicio contencioso administrativo.

Sin que tampoco asista la razón a la demandante respecto a la obligación de las autoridades enjuiciadas de acreditar su personalidad, pues es de señalarse que no resultaba necesario que las autoridades que formularon la contestación (Director General y Director de Prestaciones Socioeconómicas, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco), exhibieran el nombramiento otorgado a su favor, en virtud de que éste no es el documento que acredita la personalidad de una autoridad para acudir en representación de otra a juicio, sino en todo caso, el haber emitido directamente el acto impugnado, o en su defecto, sus facultades reglamentarias para representar a otra autoridad en juicio (supuestos que se actualizan, dado que los comparecientes acudieron, uno en nombre propio y otro en representación del ente), por ende, tal nombramiento únicamente acredita su designación, esto es, la manera en cómo el funcionario se incorporó a la función pública, lo que se traduce en un aspecto de legitimidad del cual este tribunal está impedido a pronunciarse, pues no corresponde a una cuestión de competencia legal de los mismos, postura que se robustece con las tesis invocadas en ese oficio cuyos rubros son: **“AUTORIDADES RESPONSABLES. NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR EL CARÁCTER CON EL QUE COMPARECEN AL JUICIO DE AMPARO”** y **“FUNCIONARIOS PUBLICOS. ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD EN JUICIO”**, por lo que contrario al dicho de la actora, sí resultan aplicables.

Adicionalmente, sirven de apoyo a lo anterior, por *analogía*, las tesis **VIII.1o.7 A.** y **P. XLVIII/2005**, sostenidas por el Poder Judicial de la Federación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomos III y XXII, abril de mil novecientos noventa

y seis y noviembre de dos mil cinco, páginas 409 y 5, respectivamente, que son del contenido literal siguiente:

“JUICIO DE NULIDAD FISCAL. LEGITIMIDAD DE LAS AUTORIDADES, NO TIENEN PORQUE COMPROBARLA. No existe disposición alguna en el Código Fiscal de la Federación, que establezca como requisito que las personas físicas que participan en el juicio de anulación, con el carácter de autoridades, deban demostrar que efectivamente desempeñan el cargo que ostentan. Lo anterior obedece a que la autoridad, como ente de derecho público, no está sujeta a las reglas de la representación convencional que rigen para los particulares; sólo es factible analizar jurídicamente la competencia de la autoridad para la realización de determinado acto procesal, no así, la cuestión concerniente a la legitimidad de la persona física que dice ocupar el cargo de que se trate. Por tanto, si una persona viene ocupando un cargo, la situación relativa a si es legítima su actuación, no es dable como se señaló con antelación examinarla en el juicio de nulidad, ni en la revisión fiscal, sino lo que debe estudiarse únicamente es lo relativo a la competencia para la emisión del acto; considerar que toda persona que ostenta un cargo público, siempre que lleve a cabo un acto procesal, tiene la obligación de adjuntar su nombramiento, sería tanto como exigir que también debe llevar el documento donde conste el nombramiento de quien aparece extendiendo aquél, lo que constituiría un absurdo, ya que habría necesariamente que aportar una serie de nombramientos, hasta llegar a la autoridad jerárquicamente más alta, con detrimento de la función pública, pues los titulares tendrían que desviar la atención que deben prestar a la misma, en recabar la totalidad de los nombramientos para exhibirlos juntamente con el oficio respectivo al emitir cada acto.”

20

“SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La noción de "incompetencia de origen" nació para significar los problemas que entrañaban la ilegitimidad de las autoridades locales por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección. Dicha incompetencia se distinguía de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos de autoridad, porque su conocimiento por los tribunales federales se traduciría en una intervención injustificada en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Sin embargo, la referida noción, limitada al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo extensiva a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública, introduciéndose una distinción esencial entre la incompetencia de origen y la incompetencia derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que derivó que frente a los funcionarios de jure, se creó una teoría de los funcionarios de facto, es decir, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, ya sea por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, o por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad e inhabilitación. Ahora bien, el examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los

requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En ese sentido, el indicado artículo 16 no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. Por tanto, los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal pueden conocer, con motivo de argumentos sobre incompetencia por violación al artículo 16 constitucional, de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular.”

(Lo subrayado es propio)

Por otro lado, también son **infundadas** por insuficientes las manifestaciones de la actora donde combate **4)** la incorrecta y unilateral certificación de los documentos ofrecidos por la autoridad para acreditar su personalidad, así como las pruebas ofrecidas; pues por lo que respecta a la certificación del documento a fin de acreditar la personalidad, según se ha dicho en párrafos previos, no resultaba necesario que se exhibiera documento alguno, de ahí que sean inatendibles los argumentos en ese sentido, en todo caso, por lo que respecta a la certificación de las pruebas ofrecidas por la enjuiciada a través de su contestación, este órgano jurisdiccional advierte que los elementos probatorios fueron certificados por el titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sustento en las atribuciones establecidas, entre otros, en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco⁴.

Así las cosas, se estima que la invocación de la porción normativa 12 de la ley orgánica referida, por parte del titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, resulta ser suficiente para estimar que las copias exhibidas fueron debidamente certificadas por autoridad facultada, debido a que el precepto en mención le permite certificar copias de los documentos que se encuentren en sus archivos, siendo que en la especie, tal autoridad indicó que procedía a la certificación de las copias de los documentos aludidos, mismo que se encuentran resguardados en la oficina de esa unidad, de ahí que sean de desestimarse las manifestaciones de la actora.

⁴ “**Artículo 12.-** Los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico de las Dependencias y Entidades adscritas a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos deberán certificar copias de los documentos que se encuentren en sus archivos, y solo podrán expedirlos por mandato de autoridad debidamente fundado y motivado.”

Finalmente, por cuanto hace al tópico identificado en el numeral **5)** donde impugnó o refutó las excepciones de la enjuiciada, específicamente la denominada *sine action agis*, al aducir la recurrente que no es una excepción y que, por tanto, debió desecharse y en cuanto al pronunciamiento de los alegatos formulados; es de decirse que tales manifestaciones, al estar vinculadas con el **fondo** del asunto, se procederá a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, en párrafos siguientes.

En otro orden de ideas, y, continuando con el análisis y resolución de los argumentos de agravio expuestos por la parte actora, se estiman, en su conjunto, **infundados** por insuficientes aquéllos identificados con los incisos **A), B), C), D), E), F), G), H) e I)** del considerando **TERCERO**, que en parte son reiteraciones del escrito de alegatos, en donde en esencia, señala que le causa agravio la sentencia recurrida, toda vez que la Sala no respetó el principio *pro homine* o *pro persona*, previsto en el artículo 1 constitucional, afectando su derecho humano a la previsión social, en específico, a la pensión por invalidez, siendo que en el caso, debió brindar la protección más amplia a su persona e *inaplicar* la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco (vigente), que además, se contravino lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, pues de forma retroactiva, se aplicaron en su perjuicio las disposiciones de la referida Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, cuando lo correcto era declarar la nulidad del acto impugnado y considerar aplicable al caso los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), por ser la norma que se encontraba vigente cuando la actora se dio de alta ante el instituto demandado.

En el mismo orden de ideas, señala que la sentencia combatida no fue dictada en el marco constitucional de respeto a los derechos humanos, ni con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y específicamente, progresividad, último principio que implica un gradual progreso para lograr el cumplimiento pleno de los mencionados derechos humanos, y en armonía con los diversos ordenamientos internacionales que menciona, soslayándose que la actora en su demanda planteó que tenía un derecho en vías de ejecución, pues fue dada de alta en mil novecientos noventa y cinco, de ahí que en su lugar, se debieron resguardar y proteger sus derechos en vías de adquisición, y condenar a la enjuiciada a otorgar la pensión por jubilación.

Que además, fue erróneo que la Sala haya sostenido que su derecho a la jubilación se adquiere cuando se cumplen los requisitos establecidos en la ley que se encuentre en vigor en dicho momento, pues, por el contrario, su derecho a la jubilación nace cuando el trabajador empieza a cotizar y se van generando las aportaciones, y se concluye con el trámite de obtención de pensión, por lo que la ley vigente debió ser aplicada únicamente a los trabajadores que fueron dados de alta ante el instituto a partir de su entrada en vigor, y no retroactivamente en su perjuicio, violando la constitución y los tratados internacionales en materia laboral, de seguridad y previsión social, pues el acto impugnado se dictó de manera arbitraria, desproporcionada, desigual, injusta y discriminatoria, lo cual no valoró la *a quo*.

Finalmente, que la sentencia es ilegal porque la Sala no realizó un análisis y concatenación de las pruebas ofrecidas, limitándose a resolver con base en lo expuesto por las autoridades en la contestación de demanda, sin tomar en cuenta los hechos que quedaron demostrados con las pruebas ofrecidas por la actora, así como tampoco consideró los argumentos de impugnación expresados en su demanda, dado que solicitó la nulidad del oficio número [REDACTED], por no resultarle aplicable la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente y además, porque contrario a lo señalado por la autoridad, la accionante fue dada de alta como servidor público el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco. De ahí que la Sala no respetó las formalidades esenciales del procedimiento ni su derecho de audiencia, dado que no atendió las pruebas ofrecidas en su escrito demanda, con las cuales acredita que inició sus aportaciones el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, lo cual le causa agravio, aunado a que también se dejó de suplir la queja a su favor, pues la *a quo* no se allegó de elementos probatorios incluso de manera oficiosa.

Para dar claridad a lo anterior, es preciso reiterar que a través de la sentencia combatida, la Sala Unitaria del conocimiento resolvió, en esencia, **reconocer la legalidad** del **acto impugnado** consistente en el oficio [REDACTED] de fecha **diez de febrero de dos mil veinte**, emitido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se **negó a la actora la regularización de la pensión por invalidez**; ello al estimar, esencialmente, que la propia accionante manifestó en su capítulo de hechos de su demanda que con fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis le fue emitido un dictamen médico de su estado de

salud por el Departamento de Medicina del Trabajo dependiente de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del referido instituto, por el cual le diagnosticaron lupus Eritematoso Sistemático, con afectación a órganos, Nefropatía, Lúpica, Insuficiencia Renal Crónica, Vasculitis por Lupus Eritematoso, por lo que, se le determinó que no era apta para laboral de forma permanente, lo que motivo su baja del servicio activo el dos de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en la que ya se había abrogado la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo tanto al realizar sus trámites para su pensión por invalidez, las autoridades le aplicaron la nueva ley.

Señalado lo anterior, a manera de preámbulo, es necesario precisar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se modificó, entre otros, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁵, que reconoce a todas las personas el goce de los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y establece que las normas relativas a esos derechos deberán interpretarse "conforme" con tales ordenamientos y aplicando el principio *pro persona*, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues al efecto disponen que todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Ahora bien, es preciso indicar que el acceso a la seguridad social constituye un derecho humano que a su vez se integra por otros subderechos tales como pensiones y jubilaciones, seguros de invalidez y vida, acceso a vivienda, entre otros, siendo que al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dispone que la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar

⁵ "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.

Por otro lado, la seguridad social fue reconocida un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que dispone en el artículo 22 que "toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social", y en el párrafo 1 del numeral 25, se establece a favor de toda persona el "derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

Posteriormente, este derecho fue reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual, en su artículo 9, establece que "los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social".

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la Observación General número 19⁶; donde estableció que el derecho a la seguridad social es fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. Asimismo, señaló que la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de lograr protección, en particular contra: la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; gastos excesivos de atención de salud; apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.

Ante ello, los Estados Partes deben tomar medidas efectivas y revisarlas, en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para garantizar el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social. Así, determinó que las

⁶ Documento que se invoca como **hecho notorio** y que es consultable en el siguiente enlace:

<http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4sIQ6QSmIBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdlmnsJZZVQdrCvvLm0yy7YCiVA9YY61ZiSUILHBBi7soy3RcV7r9F7zXZ1ZFNfAN5NXNL0J8rmy22Ati5yNNL%2BZFPVJU2rvf>

medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de ese derecho humano.

Finalmente, en dicho instrumento internacional, se indicó que si bien el Pacto prevé una aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que plantean los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato, tales como: garantizar el ejercicio de este derecho sin discriminación, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la obligación de adoptar medidas para garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, alimentación, vestido y vivienda, así como al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Determinando también que las medidas deliberadamente regresivas están prohibidas, y de adoptarse, corresponderá al Estado Parte la carga de la prueba de que se realizó un examen minucioso de todas las alternativas posibles y de que están debidamente justificadas en el contexto del pleno aprovechamiento del máximo de los recursos disponibles. Aseveró que el derecho a la seguridad social, al igual que todos los derechos humanos, impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes, a saber: respetar, proteger y cumplir, obligaciones últimas que son acordes a la modificación al precepto 1º constitucional antes mencionado.

26

Bajo ese orden de ideas, es preciso indicarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **229/2008**⁷, estableció que el derecho a la seguridad social está reconocido en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 10.2 y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Humanos; XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 9 del Protocolo de "San Salvador en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" y el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, y que dichos instrumentos establecen niveles mínimos de protección en cada una de las ramas de seguridad que prevén, que además, en el rubro de "**pensiones**" se considera un pago periódico que cubre la contingencia consistente en la supervivencia más allá de la edad prescrita, que en ningún caso podrá ser mayor a sesenta y cinco años.

⁷ Documento que se invoca como **hecho notorio** y que se encuentra visible en el siguiente enlace: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/21463>

En la misma ejecutoria, el Pleno del máximo tribunal del país, sostuvo que la **irretroactividad** de la ley es el principio de derecho, según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas, el cual tiende a satisfacer uno de los fines primordiales del derecho que es el de seguridad jurídica, siendo que para solucionar los temas en los que se argumente la violación al referido principio, se han desarrollado diversas teorías, entre ellas, la **teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos**, así como la **teoría de los componentes de la norma jurídica**.

Así las cosas, respeto a la primera, se procede a hacer una aclaración de lo que debe entenderse por expectativa de derecho y derecho adquirido en materia pensionaria, siendo que una expectativa de derecho, en general, es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente, es decir, un derecho que está en potencia en tanto que se cumpla con la condición correspondiente prevista en la propia norma, de ahí que, cuando se actualice la hipótesis contenida en tal norma, se traducirá en un **derecho adquirido**, lo que implicará que es hasta ese momento, que el derecho se introduce al patrimonio de una persona.

27

A mayor abundamiento, la **teoría de los derechos adquiridos** consiste en que cuando el acto realizado introduce un bien, facultad o un provecho al patrimonio de un individuo o a su dominio o haber jurídico, éste no se le puede privar mediante una disposición legal en contrario; lo que no acontece tratándose de las **expectativas de derechos**, que son aquellos derechos que se pueden llegar a obtener en el futuro con la realización de determinados actos complementarios por la ley, pero que todavía no se obtienen.

En estas condiciones, **si una ley o un acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no se viola el principio de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional.**

Por otro lado, la “**teoría de los componentes de la norma**” abordada, además, en la jurisprudencia **P./J.123/2001**⁸, considera que

⁸ “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra

toda norma jurídica contiene un **supuesto** y una **consecuencia**, de suerte que si se realiza el supuesto, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitarlos y cumplir con éstas. No obstante, también se consideró que el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo; lo que acontece cuando éstos son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales, que para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica; y entre las que destacó la relativa a cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia establecidos en ella, caso en que ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquél supuesto o esa consecuencia, sin violar la garantía o derecho de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida.

28

Así las cosas, con base, entre otros, en el referido amparo en revisión **229/2008**, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sendas tesis de jurisprudencia de carácter obligatorio para este juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor⁹, como la **P./J. 125/2008** y **P./J. 108/2008**, que son del contenido literal siguiente:

“ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). Conforme a las teorías de los derechos

fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

⁹ **Artículo 217.** La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte.”

adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, incluso, el artículo 48 de la ley derogada expresamente establecía que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En esa virtud, si el artículo décimo transitorio, para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1o. de enero de 2010, además de 30 años de cotización para los hombres y 28 años para las mujeres, establece como requisito 51 años de edad para los hombres y 49 para las mujeres, la que se incrementará de manera gradual hasta llegar a los 60 y 58 años respectivamente, en el año 2026, aumento que también se refleja para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de 56 a 60 años y para la de cesantía en edad avanzada de 61 a 65 años, igualmente de manera gradual, lo que implica que en relación con el sistema pensionario anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.”¹⁰

“ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). El nuevo régimen de seguridad social que prevé el citado ordenamiento legal en su integridad, por sí, no puede estimarse retroactivo en virtud de que rige hacia el futuro, es decir, a partir de que entró en vigor la ley reclamada. Por otra parte, por cuanto se refiere a los trabajadores que empiecen a cotizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con posterioridad al primero de abril de dos mil siete, es evidente que no puede estimarse que adquirieron algún derecho al amparo de la ley derogada y, por ende, la nueva ley en nada les afecta. Tratándose de los jubilados o pensionados con anterioridad a la fecha en comento y sus familiares derechohabientes, la ley reclamada no afecta los derechos que adquirieron durante la vigencia de la ley anterior, ya que en su artículo décimo octavo transitorio expresamente señala que éstos continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones precisados en las disposiciones vigentes en la época que se pensionaron; y en relación con los trabajadores que a la entrada en vigor de la ley reclamada se encontraran cotizando al Instituto, el artículo quinto transitorio establece que podrán elegir entre mantenerse en el sistema de pensiones previsto en la ley de 1983 con ciertas modificaciones que se implementarán gradualmente, o bien, en migrar al nuevo sistema de "cuentas individuales" mediante la entrega de un bono de reconocimiento de beneficios pensionarios, sin que obste a lo anterior el hecho de que los artículos primero y segundo transitorios establezcan que la ley de 1983 quedará abrogada cuando la nueva entre en vigor, puesto que, si el artículo décimo octavo transitorio precisa que quienes se hayan jubilado o pensionado con anterioridad a su entrada en vigor continuarán ejerciendo sus derechos en los

¹⁰ Tesis de jurisprudencia P./J. 125/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, página 35, registro 166382.

términos y condiciones señaladas en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento, y en el artículo décimo transitorio se establecen modalidades al anterior sistema de pensiones que se implementarán gradualmente, es evidente que el ordenamiento legal citado en primer término en realidad se derogó parcialmente.”¹¹

En tales interpretaciones jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que en tratándose de **derechos pensionarios**, estos no son derechos surgidos por el sólo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto del pago de las cotizaciones, sino que constituyen expectativas de derecho que se concretan hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya que la incorporación de dichas prestaciones al patrimonio jurídico de las personas, se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos para tales efectos, regularmente, edad estipulada y tiempo fijado de servicio e igual de aportaciones o cotizaciones.

Lo anterior, así ha sido reiterado, además, en posteriores jurisprudencias, como la número **2a./J. 33/2017 (10a.)**, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, abril de dos mil diecisiete, página 949, de rubro y texto siguientes:

“INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA. El artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, señala que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y, posteriormente, mediante reforma vigente a partir del 1 de enero de 2002, establece que se adopta para tales fines el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en proporción al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, según sea el referente que resulte de mayor beneficio. Ahora bien, en virtud de la fecha en que entró en vigor esa modificación legislativa, quienes se pensionaron con anterioridad a ella solamente adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones conforme al aumento del salario mínimo aludido, por lo que no les es aplicable retroactivamente el citado precepto, habida cuenta que la jubilación no es un derecho surgido por el solo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto del pago de las cotizaciones, sino que constituye una mera expectativa de derecho que se concreta hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya que la incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de las personas se encuentra condicionada al cumplimiento de los

¹¹ Tesis de jurisprudencia **P./J. 108/2008**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, página 28, registro 166387.

años de servicio requeridos. Por tanto, mientras no exista un mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, el parámetro que legalmente les corresponde a sus incrementos es el previsto en función del salario mínimo, el cual no puede sustituirse, vía interpretativa, por un sistema indexado o el homologado con quienes se encuentran laboralmente en activo, porque sería tanto como desconocer el principio constantemente reiterado en el sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse, y asignar a la ley un efecto retroactivo que no tuvo en mente el autor de la reforma respectiva.”

(Énfasis añadido)

Asimismo, en la jurisprudencia **II.1o.A. J/26 (9a.)**, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, libro XI, tomo 2, agosto de mil doce, página 1313, registro 159994, que es del rubro y texto siguientes:

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN, EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUPEDITADO A LA SOLICITUD DEL INTERESADO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE GENEREN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE PARA ELLO Y EL DERECHO RELATIVO. Los artículos 66 a 68, 75 a 79 y 81 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios prevén el trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, el cual se caracteriza por iniciar a petición de parte, por escrito y mediante los formatos establecidos por el propio instituto, debiendo además cumplir con una serie de requisitos documentales, según el tipo de pensión solicitada, y aun cuando dicho trámite no es un requisito sustantivo, sí es una cuestión de procedibilidad que al no ser satisfecha, impide al interesado adquirir el derecho a aquélla. Por otra parte, los servidores públicos de la mencionada entidad y Municipios no adquieren el derecho a una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicios de acuerdo a las normas vigentes en la época en que se incorporaron a la función pública, en virtud de que en ese momento todavía no se generan los supuestos requeridos (edad y la antigüedad en el servicio) y, por ende, tampoco la consecuencia (derecho a la pensión), por lo que si éstos se produjeron durante la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios vigente, ésta resulta ser la norma jurídica aplicable para resolver la solicitud relativa, sin que ello contraría el principio de irretroactividad de la ley, dado que el trabajador sólo contaba con una expectativa de su derecho a la jubilación. Consecuentemente, el otorgamiento de una pensión como las señaladas está supeditado a la solicitud del interesado conforme a la legislación vigente al momento en que se generen los supuestos previstos legalmente para ello y el derecho relativo.”

(Subrayado añadido)

Igualmente, en criterios orientadores, como la tesis **VII-CASR-GO-45**, visible en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, octava época, año I, número 5, diciembre dos mil dieciséis, página 267, de rubro y texto siguientes:

“PENSIÓN. EXPECTATIVA DE DERECHO Y DERECHO ADQUIRIDO.- La pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, esto es, el derecho a la pensión no nace cuando se ingresa a laborar, sino cuando se cumple con los requisitos previstos en la ley respectiva. Por tanto, si bien es cierto el trabajador inició su vida laboral cuando se encontraba vigente la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, ello solo le generó una expectativa de derecho, es decir, una esperanza o una pretensión de que se realizaría una determinada situación jurídica (obtener una pensión), sin embargo su derecho a una pensión se genera hasta que se cumple con los requisitos para obtenerla. Lo anterior se corrobora, del contenido del artículo 44 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, el cual establece que el derecho al goce de las pensiones comenzará desde el día en que el trabajador o sus familiares derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para ello, lo que acredita que hasta antes de que se cumpla con los requisitos, lo que se tiene es una expectativa de derecho.”

(Subrayado añadido)

32 En consecuencia, se puede afirmar que la pensión por invalidez, conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada y a la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente, constituye una prestación de seguridad social (derecho subjetivo) reconocida por el instituto, a favor de los trabajadores que cumplan, entre otros requisitos, con determinado tiempo de servicio y/o aportar al instituto, siendo que se **adquirirá** ese derecho a ser reconocido por el instituto, hasta en tanto se cumplan con los requisitos para su otorgamiento previstos en las leyes que lo rijan, vigentes al momento en que se actualicen las condiciones contenidas en la norma, esto al tratarse, se insiste, de una expectativa de derecho.

Señalado lo anterior, de las constancias de autos se advierten como hechos relevantes que dieron lugar al acto impugnado antes referido (oficio [REDACTED] de fecha **diez de febrero de dos mil veinte**), los siguientes:

- El **siete de agosto de mil novecientos sesenta y nueve**, es la fecha de nacimiento de la parte actora – según su Clave Única de Registro de Población (CURP), e Instituto Nacional Electoral (INE) - (folios 17 y 18 del original del expediente principal).
- Con fecha **dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco**, la actora C. [REDACTED], ingresó al servicio público como trabajadora de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, habiendo cotizado al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco al treinta y uno de diciembre de dos mil quince un periodo de **veinte años, dos**

meses y quince días (folio 68 y 69 del original del expediente principal).

- El **siete de octubre de dos mil dieciséis** a través del oficio número [REDACTED], fue expedido el dictamen médico de estado de salud de la C. [REDACTED], en el cual se determinó que no apta para laborar de forma total y permanente, contando con veintiún años de aportaciones al régimen de seguridad social del instituto (folio 67 del juicio de origen).
- En fecha **diez de noviembre de dos mil dieciséis** la actora solicitó su baja por pensión por invalidez, lo cual se desprende de los hechos de su escrito inicial de demanda (folio 4 del juicio de origen)
- La baja de la C. [REDACTED], fue el **treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete** (folio 4 del juicio de origen).
- El **treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete**, fecha en la que causó baja la parte actora como pensionada ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, información que se desprende del oficio [REDACTED] (folio 70 del juicio de origen)
- Con fecha **diecisiete de agosto de dos mil diecisiete**, la actora presentó un escrito mediante el cual solicitó ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se le autorizara la regularización de su pensión por invalidez (folios 25 a 27 del original del expediente principal).
- Mediante oficio [REDACTED] de fecha **diez de febrero de dos mil veinte**, emitido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del referido instituto, se **negó la regularización de la pensión por invalidez** solicitada por la actora, al señalarse que no reunió los requisitos previstos en el artículo 52 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), para tener un derecho adquirido; por lo que debe apegarse a las nuevas disposiciones de la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. **Este último oficio consiste en el acto impugnado en el juicio de origen** (folios 22 y 23 del expediente principal).

33

Precisado ello, se tiene que para verificar si a la actora le asiste o no el derecho subjetivo de obtener la pensión solicitada, dicho análisis debe hacerse conforme a los requisitos establecidos en la ley vigente al momento en que tales requisitos, en su caso, se actualizaron, siendo necesario para tal efecto analizar el contenido de los **artículos 57, 58, 60 y 61 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada**, en vigor hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, así como 90, Sexto, Octavo y Noveno Transitorio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, vigente a partir

del uno de enero de dos mil dieciséis, preceptos algunos invocados por la parte accionante y otros más por la autoridad demandada en el acto impugnado, así como a través de su contestación, que son del contenido literal siguiente:

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ABROGADA)

“**Artículo 57.-** La pensión por invalidez se otorgará a los servidores públicos por pérdida de las facultades físicas y mentales necesarias para el desempeño normal de su cargo o empleo, resultando de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; en estos casos la pensión será el 100% del último sueldo que haya disfrutado el asegurado.

Si la invalidez proviene de otras causas y el asegurado contribuyó por 15 años o más tendrá derecho a pensión por invalidez conforme a esta Tabla:

TABLA DE PORCENTAJES

AÑOS DE SERVICIO SUELDO	PORCENTAJE DEL ÚLTIMO SUELDO
15	55%
16	58%
17	61%
18	64%
19	67%
20	70%
21	73%
22	76%
23	79%
24	82%
25	85%
26	88%
27	91%
28	94%
29	97%
30	100%

34

Artículo 58.- El Derecho al pago de esta pensión comienza a partir de la fecha en que cause baja por la inhabilitación.

Artículo 60.- El otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los siguientes requisitos:

I. Solicitud estricta hecha por el servidor público, o su representante legal, ante el Instituto;

II. Dictamen del médico designado por el Instituto que certifique y compruebe la existencia y grado de incapacidad padecida por el servidor público. Si el solicitante no estuviera de acuerdo con tal dictamen, podrá por si o a través de su representante, designar a su costa perito médico distinto para que rinda dictamen en la materia; en caso de desacuerdo entre ambos dictámenes, el Instituto designará un tercer perito, preferentemente un especialista, para que elabore nuevo dictamen que resultará obligatorio, definitivo e inapelable por ambas partes.

Artículo 61.- Los solicitantes de esta pensión y los pensionados por la misma causa, están obligados a someterse a los exámenes, reconocimiento y tratamientos

que el Instituto les prescriba y proporcione, y en caso de no hacerlo no se les tramitará su solicitud o se les suspenderá el goce de la pensión.”

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (VIGENTE)

“**Artículo 90.-** La pensión por invalidez se otorgará cuando el asegurado haya quedado inválido total y permanentemente, como resultado de un accidente o enfermedad. La declaración de invalidez, deberá ser realizada por el Departamento de Medicina del Trabajo del ISSET.

Si la invalidez proviene de un accidente o enfermedad profesional, la pensión será del 70% del sueldo regulador del asegurado.

Si la invalidez deriva de otras causas y el asegurado contribuyó por 5 años o más, tendrá derecho a pensión de invalidez conforme a la siguiente tabla:

TABLA DE PORCENTAJES			
AÑOS DE SERVICIO MUJERES	PORCENTAJE DEL SUELDO REGULADOR	AÑOS DE SERVICIO HOMBRES	PORCENTAJE DEL SUELDO REGULADOR
5-10	20.0%	5-10	20%
11	22.5%	11	22%
12	25.0%	12	24%
13	27.5%	13	26%
14	30.0%	14	28%
15	32.5%	15	30%
16	35.0%	16	32%
17	37.5%	17	34%
18	40.0%	18	36%
19	42.5%	19	38%
20	45.0%	20	40%
21	47.5%	21	42%
22	50.0%	22	44%
23	52.5%	23	46%
24	55.0%	24	48%
25	57.5%	25	50%
26	60.0%	26	52%
27	62.5%	27	54%
28	65.0%	28	56%
29	67.5%	29	58%
30	70.0%	30	60%
		31	62%
		32	64%
		33	66%
		34	68%
		35	70%

En ambos casos se podrá hacer uso del saldo de la cuenta individual.

(...)

SEXTO.- A los asegurados que se encuentren cotizando al ISSET(sic) a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se les reconocerán los períodos cotizados con anterioridad, así como los derechos adquiridos.

Para efectos del Artículo 6, Fracción VII, respecto de aportación extraordinaria para la afiliación de ascendientes, éste se aplicará para nuevas contrataciones.

(...)

OCTAVO.- Aquellos asegurados que no tengan derecho a pensión alguna de las amparadas por la ley abrogada,

deberán de apegarse a las nuevas disposiciones de la presente Ley.

NOVENO.- A partir del día siguiente a la publicación de esta Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los asegurados del régimen de la ley abrogada que **tengan derecho a pensión**, tendrán seis meses para solicitar por escrito al ISSET(sic) su permanencia en el régimen o su transición al régimen establecido en esta Ley.

La solicitud al ISSET(sic) se hará a través de los Entes(sic) Públicos(sic) en los que laboren los asegurados, en los términos que se establezcan y se le hayan dado a conocer, y ésta será definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para ejercer este derecho deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Cuando el asegurado no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se entenderá que opta por transitar al régimen previsto en esta Ley.”

(Énfasis añadido)

36

De la interpretación a los preceptos transcritos, correspondiente a la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se obtiene, como premisa, que la **pensión por invalidez** se otorgará a los servidores públicos por pérdida de las facultades físicas y mentales necesarias para el desempeño normal de su cargo o empleo, resultando de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; en estos casos la pensión será el 100% del último sueldo que haya disfrutado el asegurado; por otra parte, si la invalidez proviene de otras causas y el asegurado contribuyó por quince años o más tendrá derecho a pensión por invalidez conforme a la tabla insertada en dicho numeral.

De igual manera que el derecho al pago de esta pensión comienza a partir de la fecha en que cause baja por la inhabilitación, asimismo que para el otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Solicitud estricta hecha por el servidor público, o su representante legal, ante el Instituto y b) Dictamen del médico designado por el Instituto que certifique y compruebe la existencia y grado de incapacidad padecida por el servidor público. Si el solicitante no estuviera de acuerdo con tal dictamen, podrá por sí o a través de su representante, designar a su costa perito médico distinto para que rinda dictamen en la materia; en caso de desacuerdo entre ambos dictámenes, el Instituto designará un tercer perito, preferentemente un especialista, para que elabore nuevo dictamen que resultará obligatorio, definitivo e inapelable por ambas partes.

Por último que los solicitantes de esta pensión y los pensionados por la misma causa, están obligados a someterse a los exámenes, reconocimiento y tratamientos que el Instituto les prescriba y proporcione, y en caso de no hacerlo no se les tramitará su solicitud o se les suspenderá el goce de la pensión.

Al respecto, la normativa vigente dispone que la **pensión por invalidez** se otorgará cuando el asegurado haya quedado inválido total y permanentemente, como resultado de un accidente o enfermedad y que la declaración de invalidez, deberá ser realizada por el Departamento de Medicina del Trabajo del ISSET, asimismo, si la invalidez proviene de un accidente o enfermedad profesional, la pensión será del 70% del sueldo regulador del asegurado, o en su caso, si deriva de otras causas y el asegurado contribuyó por cinco años o más, tendrá derecho a pensión de invalidez conforme a la tabla para ello.

Por otra parte, de la interpretación armónica a los restantes numerales de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente, igualmente se desprenden, como premisas, que los asegurados que a la entrada en vigor de esa ley se encuentren cotizando ante dicho instituto, le serán reconocidos los periodos cotizados con anterioridad, así como los derechos adquiridos.

Luego, con relación a aquellos asegurados que no tengan derecho a alguna de las pensiones contempladas por la ley abrogada, se dispuso que deberán cumplir con las nuevas disposiciones establecidas en la ley vigente.

Asimismo, los asegurados del régimen de la ley abrogada que tengan derecho a pensión, tendrán **seis meses** (contados inicialmente a partir de la publicación de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco en vigor), a fin de solicitar por escrito al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (a través del formato autorizado), su permanencia en ese régimen o su transición al régimen establecido en la nueva ley, siendo que cuando el asegurado no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se *entenderá* que opta por transitar al régimen previsto en la nueva ley.

Con base en lo anterior, como se anticipó, los argumentos de agravio expuestos son **infundados** por insuficientes.

Ello es así, pues en el caso se estima acertada la determinación de la Sala *a quo*, porque contrario a lo que argumenta la actora ahora recurrente, en la especie se está frente a una simple expectativa de derecho, y no así frente a un derecho adquirido por parte de la accionante, debido a que de conformidad con las constancias que obran en el expediente y que han sido previamente analizadas, las cuales hacen prueba suficiente en términos del artículo 68 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco¹², se puede advertir que la C. [REDACTED], cuando todavía se encontraban vigentes los **artículos 57, 58, 60 y 61 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada**, no satisfizo plenamente los requisitos legales para obtener la pensión por invalidez, ya que al día treinta y uno de diciembre de dos mil quince, aun se encontraba laborando y no contaba con algún dictamen médico designado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco que certificara y comprobara la existencia y grado de incapacidad que en su caso padecida la actora.

38

Lo anterior, se sostiene pues si bien la parte actora a través de sus agravios señala que en la sentencia combatida de forma ilegal se omitió valorar las pruebas que ofreció con bases en las cuales, dice acreditar que su fecha de alta ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y entiéndase, de cotización, fue el día dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y no así el uno de enero de mil novecientos noventa y seis, como lo expuso la autoridad demandada en el acto impugnado, lo cierto es que se estima que de una revisión directa que se hace a los elementos probatorios aportados en su escrito de demanda, estos son insuficientes para los fines pretendidos.

Efectivamente, conforme se indicó previamente, a través del escrito de demanda, la accionante exhibió como pruebas de su parte: **1)** copia de la credencial para votar expedida a nombre de la ciudadana Cecilia Jiménez Escobar, por el Instituto Nacional Electoral, con la que

¹² "Artículo 68.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I. Harán prueba plena, la confesión expresa de las partes, la inspección ocular, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridades en documentos públicos, pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado;

II. Las documentales públicas y la inspección judicial siempre harán prueba plena;

III. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas; y

IV. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación del Magistrado Unitario.

Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la autoridad jurisdiccional adquiriera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia."

demuestra la personalidad que ostenta; **2)** copia de la Constancia de la Clave única de Registro de Población (CURP) con número [REDACTED], expedida a nombre de la actora [REDACTED], con la que acredita su identidad; **3)** copia del recibo de pago, del periodo comprendido del dieciséis de octubre al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación dependiente del Gobierno del Estado de Tabasco, con lo que se demuestra tener una relación laboral con la Secretaría de Educación, en la cual se le realizó un pago por la prestación de servicio; **4)** copia del recibo de pago, del periodo comprendido del dieciséis al treinta de marzo de dos mil diecisiete, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco; **5)** copia del comprobante de pago de pensión por invalidez correspondiente del uno al treinta y uno de enero de dos mil veinte, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con la que acredita el pago de la cantidad de su pensión de invalidez que le fue otorgado; **6)** original del oficio [REDACTED] de fecha diez de febrero de dos mil veinte, firmado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dirigido a la ciudadana [REDACTED], donde se otorga la respuesta a su escrito de inconformidad respecto al monto de pago de pensión, con la que demuestra el acto reclamado; **7)** original de la pensión por invalidez, de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, otorgada a la parte actora, por el Director Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **8)** copia simple del escrito de siete de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por la derechohabiente [REDACTED], y dirigido al Titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, misma que contiene inconformidad respecto al monto que el instituto le determinó como pago de pensión por invalidez; **9)** copia del formato D.R.H. de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, expedida a nombre de la actora [REDACTED], por la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con la que demuestra la baja del servicio por invalidez; **10)** original de la hoja de registro de la demanda de amparo indirecto, con sello de recibido el nueve de diciembre de dos mil veinte, promovido por la actora [REDACTED]; **11)** copia del acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, derivado del juicio de amparo número 2096/2019 y sus anexos, donde se concede vista a la actora de los oficios números [REDACTED], respecto al

cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y **12)** original de la constancia de antigüedad laboral a nombre de la accionante, expedido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

Así, se tiene que tales elementos son suficientes para los fines propuestos habida cuenta que la actora pretende acreditar que su fecha de alta ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco fue el día dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, con las documentales identificadas con los incisos **3)** y **12)** la primera de ellas fue exhibida en copia simple, convalidándose con la copia certificada que exhibió la autoridad visible a foja 69 del juicio de origen, y la segunda fue exhibido en original, por tanto sí tienen valor probatorio suficiente y crean convicción de su contenido, al ser adminiculado con otras pruebas de pleno valor probatorio, sin embargo no es suficiente para acreditar que la actora tuviera derecho a la pensión de invalidez conforme a la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, es decir no tiene el derecho adquirido, ello porque de acuerdo al dictamen médico **su incapacidad fue dictaminada el siete de octubre de dos mil diecisiete**, fecha en la que ya se encontraba vigente la nueva ley del multireferido instituto, máxime que a la fecha de alta que acreditó solo son dos meses y catorce días más de lo reconocido por las enjuiciadas que fueron veintiún años y siete meses, por lo tanto sumando ambos periodos dan un total de **veintiún años, nueve meses y catorce días**, sin que con ello pueda obtener un porcentaje mayor a lo determinado por las enjuiciadas conforme a la tabla establecida en el artículo 90 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente.

40

Tales pruebas son del contenido siguiente (folios 26, 41 y 69 del expediente de origen):

QUINQUENIO 04.20 AÑOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ABONO A CUENTA

No. RECIBO: A 366817
No. QUINCENA: 06/2017
PERIODO PAGADO: 16 MAR 30 MAR

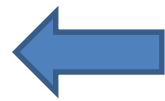
B.E.C.: [REDACTED] G.P.: 1
CLAVE CATEGORÍA: E-08-01

NOMBRE: [REDACTED] NUM. DE EXP.: [REDACTED]

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA	N. CARRE.	N. PLAZA	T. P.	PAGADOR	FECHA DE ALTA	CLAVE PROGRAMÁTICA	IMP/PCP
MTRD. TELE-SEG. TIZA		1232	MO3E		16/10/1995	72 7A	
CLAVE	IMPORTE	CLAVE	IMPORTE	CLAVE	IMPORTE	CLAVE	IMPORTE
1134	10203.45	1311	99.60	12	10.00	56	342.00
1716	278.90			139	334.70	36	1,764.00
1541	110.25			140	47.95	24	102.05
1541	362.25			141	516.30	01	1,945.20
154H	88.55			142	439.75		
1342	1.10			143	67.35		
1342	3.90			144	28.55		
154G	90.55			145	95.90		
154G	16.80			54	35.00		
154D	1274.00			08	552.00		
TOTAL PERCEPCIONES		\$ 12,829.35		71		1,286.80	
CREDITO AL SALARIO		\$		TOTAL DEDUCCIONES		7,667.55	
TOTAL		[REDACTED]		ALCANCE LIQUIDO		4,861.80	
FALTAS							

Tabasco cambia contigo

CONSERVE Y PRESENTE ESTE RECIBO PARA CUALQUIER ACLARACION



En ese sentido, aun cuando la parte actora acreditó que su fecha de alta ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco fue el día dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, ello de conformidad con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco¹³, de aplicación supletoria a la materia; sin embargo, no logró desvirtuar el contenido del acto impugnado, es decir no acreditó que le fuera aplicable la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pues se reitera que en la fecha que fue elaborado el dictamen médico que determinó incapacidad para laborar – siete de octubre de dos mil diecisiete- ya se encontraba vigente la nueva ley.

Una vez señalado lo anterior, se dice que no asiste la razón a la actora en cuanto a que le resultan aplicables las reglas de pensión previstas en la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dado que la fecha de su dictamen dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, tal como se ha detallado, estando vigente la nueva y al no contar con derecho adquirido no le era aplicable la abrogada.

42

Por lo anterior, es evidente que tal como lo dijo la Sala del conocimiento, la actora no satisfizo los requisitos para ser beneficiaria de un derecho pensionario conforme a las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), de ahí que **la actora no contaba con un derecho adquirido, sino con una mera expectativa de derecho**, ya que a ese momento (treinta y uno de diciembre de dos mil quince), no cumplía con **todos** los requisitos para su otorgamiento, conforme a esa normatividad entonces vigente.

En ese sentido, no es posible desconocer por este Pleno que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (que entró en vigor el día uno de enero de dos mil dieciséis, conforme a su artículo Primero Transitorio), en la cual el legislador local, en uso de sus facultades constitucionales, dispuso en su artículo Sexto Transitorio que aquellos asegurados que no tuvieran derecho a alguna de las pensiones contempladas por la ley abrogada,

¹³ "Artículo 240.-

Carga de la prueba

Las partes tienen la carga de probar las proposiciones de hecho en que funden sus acciones y excepciones, así como los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal.

En caso de duda respecto de la atribución de la carga de la prueba, ésta deberá ser rendida por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla o, si esto no podrá determinarse, corresponderá a quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse."

deberán cumplir con las nuevas disposiciones establecidas en la ley vigente.

De ahí que haya sido **legal** la sentencia combatida por medio de la cual se reconoció la **validez del acto impugnado**, pues la autoridad enjuiciada de forma acertada sostuvo que a la actora le es aplicable la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco (vigente).

De todo lo anterior que no asista razón a la recurrente, cuando sostiene que se realizó una aplicación retroactiva(sic) de la nueva Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco en su perjuicio, pues aun cuando no se desconoce que la actora fue inscrita en el sistema de seguridad social durante la vigencia de la ahora abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, lo cierto es que como se ha dicho, en estricto acatamiento a las diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este tribunal, el otorgamiento de una pensión constituye una expectativa de derecho, en tanto está condicionada a la satisfacción de ciertos requisitos como lo son la edad y la antigüedad en el servicio, o como en el caso, la existencia de un dictamen médico que declare la incapacidad total y permanente, por ende, es inconcuso que el derecho a la pensión no nace cuando se ingresa a laborar, sino una vez se cumplen los requisitos previstos en la ley respectiva, de ahí que contrario a su dicho, **no pueda estimarse que se trata de un derecho en vías de ejecución el cual se debió resguardar por la autoridad administrativa**, y menos aún que exista aplicación retroactiva a la norma legal en su perjuicio, pues ello no acontece respecto de expectativas de derecho -sino únicamente en torno a derechos adquiridos-, lo cual no se actualiza en la especie.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis **2511** emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sexta época, tomo I, página 1745, registro 903184, de rubro y texto siguientes:

“RETROACTIVIDAD, TEORIAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. **El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en**

el acto, ni por disposición legal en contrario; y la **expectativa de derecho** es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: "Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial". "La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos". "Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye".

(Énfasis añadido)

Así como también, la tesis **2a. LXXXVIII/2001**, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, junio de dos mil uno, página 306, registro 189448, que es del rubro y texto siguiente:

44

“IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.”

(Énfasis añadido)

Por otra parte, es un **hecho notorio** que mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha nueve de julio de

dos mil dieciséis, la Junta de Gobierno del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dio a conocer el formato de “Solicitud de Permanencia en el Régimen de la Ley del ISSET(sic) Abrogada(sic) o de Transición(sic) al Régimen(sic) de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco”, mismo que entró en vigor el día diez de julio de dos mil dieciséis, es decir, pasado los seis meses de iniciada la vigencia de la nueva Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco; lo cierto es que ello a nada trasciende al presente asunto dado que como ha quedado previamente analizado, el formato referido es para el efecto de que los asegurados del régimen de la ley abrogada, que tuvieran derecho a una pensión, pudieran solicitar por escrito su permanencia en el régimen abrogado o transición al nuevo régimen ante el instituto demandado, siendo que en la especie, como se indicó, la actora no contaba con un derecho adquirido a una de las pensiones del régimen abrogado, al no reunir los requisitos de la abrogada norma, por lo que no podía solicitar su permanencia al régimen abrogado mediante la presentación del referido formato.

De lo anterior que a nada trascienda el argumento de la recurrente en torno a que es ilegal la sentencia debido a que la Sala omitió estudiar su argumento del escrito de desahogo de vista de la contestación a la demanda consistente en **5)** la impugnación a las excepciones de la enjuiciada, específicamente la denominada *sine action agis*, la cual no es una excepción y, por tanto, debió desecharse; pues si bien la Sala *a quo* sostuvo que al no haberse demostrado la ilegalidad del acto impugnado, era procedente reconocer su validez, y, en consecuencia, declaró fundada tal excepción(sic); lo cierto es que aun cuando de forma inexacta se le denomine excepción a la antes referida, ello ninguna implicación tiene, dado que dicha defensa reviste la negación absoluta del derecho aducido en la demanda, es decir, que a la actora le asista el derecho pretendido, como en el caso, del derecho pensionario a la invalidez, lo cual fue resuelto de forma acertada por la Sala, conforme a los razonamientos antes estudiados.

También es **infundada** la manifestación de la accionante en la que señala que es procedente *inaplicar* las disposiciones de la nueva Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco (vigente), pues si bien, como se explicó previamente, conforme al artículo 1 constitucional, todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la constitución y en los

tratados internacionales de los que México sea parte, interpretando las normas y favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Siendo que conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene a los tratados parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes generales de la Unión, de manera que se hará un control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos que consiste en realizar una interpretación del orden jurídico conforme a los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

Luego, para el ejercicio del control *ex officio*, el órgano jurisdiccional debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de realizar ese tipo de control, es decir, en cada caso determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto, o una *inaplicación*, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos.

46

Lo cierto es que en el caso, aun cuando no se puede desconocer que el legislador impuso porcentajes distintos para obtener el derecho pensionario que solicita la actora, dado que la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al instituto, pues su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos; es el caso que no se considera que la aplicación de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco vigente mediante el acto impugnado, sea violatorio de sus derechos humanos y que por ende, deban inaplicarse dichas disposiciones, debido a que los porcentajes sean diferentes dependiendo los años de cotización, **no afecta derechos adquiridos ni se puede estimar regresiva**, pues a través de la normatividad vigente, se sigue garantizando el derecho a la seguridad social de los trabajadores del Estado, en su modalidad pensionaria, aun cuando ello implique cubrir mayores requisitos para su otorgamiento, lo cual se insiste, se realizó bajo la libertad configurativa del legislador, pues no debe soslayarse que los derechos no son absolutos, por tanto, pueden ser objeto de modalidades y restricciones, siempre y cuando no se afecte la seguridad jurídica que los particulares, lo cual no ocurre con simples expectativas de derechos, como en el caso.

Máxime que en el caso, se insiste, no se modificaron o alteraron derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, sino simples expectativas de derecho, además de que a consideración de este juzgador, tal norma no resulta evidentemente sospechosa o contraria a los parámetros de control de los derechos humanos, dado que garantiza la supervivencia de los asegurados ante situaciones de invalidez, como acontece en el caso.

Sirve de sustento a la determinación anterior, por *analogía*, la tesis de jurisprudencia **2a./J. 16/2014 (10a.)**, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 5, abril de dos mil catorce, tomo I, página 984, registro 2006186, que es del contenido siguiente:

“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues

además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconveniencia de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y conveniencia del precepto en el sistema concentrado.”

(Subrayado añadido)

48 Sin que con la determinación anterior, este Pleno de la Sala Superior contravenga el principio *pro homine* o *pro persona*, previsto en el artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de la forma que favorezca más ampliamente a las personas; pues si bien se reitera que la auténtica pretensión de la actora C. ██████████ ██████████, es obtener una regularización a su pensión por invalidez, aplicando el artículo 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, lo cierto es que para ello este órgano revisor se encuentra obligado a verificar que se cumplan los supuestos legales que conlleven al reconocimiento de tal derecho subjetivo, lo que en el caso, se insiste, no aconteció.

Lo anterior es así, pues la aplicación del principio *pro homine* o *pro persona*, no llega al extremo de violentar el principio de equidad procesal o desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad de las acciones, que son propios de una impartición de justicia completa y expedita, que debe regir todo juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirven de sustento a lo anterior, las tesis de jurisprudencia **2a./J. 98/2014 (10a.)** y **2a./J.56/2014**, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomos I y II, octubre y mayo

de dos mil catorce, registros 2007621 y 2006485, páginas 909 y 772, respectivamente, que son del rubro y contenido siguiente:

“DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.”

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVEÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.”

(Énfasis añadido)

También tiene aplicación a lo anterior, la tesis **III.4o.T.2K (10^a)**, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomo IV, enero de dos mil catorce, registro 2005342, página 3072, que es del rubro y contenido siguiente:

“INCONFORMIDAD. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SU PRESENTACIÓN SE SUJETA A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA, POR LO QUE SI EL INCONFORME INCUMPLE CON EL PRESUPUESTO PROCESAL DE SU OPORTUNIDAD, NO PUEDE NI DEBE SER MOTIVO DE ANÁLISIS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que

tenga por cumplida la ejecutoria, a petición suya se enviará el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, de otro modo, ésta se tendrá por consentida. De ello se infiere que la inconformidad debe presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente pues, de no ser así se tendrá por consentida y el Tribunal Colegiado de Circuito estará impedido para analizarla de fondo, por actualizarse la extemporaneidad o inoportunidad de su presentación; sin que al efecto pueda alegarse que el órgano revisor se encuentre compelido a examinar dicho recurso presentado fuera de tiempo, bajo el argumento de que debe cederse ante la preeminencia que adquiere el efecto reparador de la sentencia tutelar de derechos fundamentales, ni tampoco por la aseveración de que al tratarse de una cuestión de orden público y a la luz del principio pro homine y la interpretación conforme, el tribunal deba entrar a su estudio, toda vez que la inconformidad no puede ni debe ser motivo de análisis por el órgano jurisdiccional colegiado, si el inconforme no cumple con el presupuesto procesal de la oportunidad, esto es así, en razón de que la aplicación del citado principio y de la interpretación conforme, **no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, que son propios de una eficaz y expedita administración de justicia de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, además, sirven de base para una efectiva protección de los derechos de las personas, ya que no respetar los presupuestos procesales implicaría la existencia de una inseguridad jurídica para las partes**, al no respetarse los plazos establecidos por el legislador.”

50

(Énfasis añadido)

Por todo lo anterior, habiéndose realizado el análisis exhaustivo de los argumentos formulados por la parte actora recurrente y, ante lo **parcialmente fundado pero insuficiente**, de los mismos, lo procedente es **confirmar** la **sentencia definitiva** de fecha **diecisiete de enero de dos mil veintitrés**, dictada en el expediente **189/2020-S-1**, por la **Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco**.

Finalmente, esta juzgadora considera oportuno señalar que el pronunciamiento anterior, se hace atendiendo a la *litis* estrictamente planteada en el recurso de trato.

Es de señalarse que el criterio anterior ya fue sostenido en la sentencia dictada en los tocas de apelación **AP-003/2022-P-3**, **AP-106/2022-P-1** y **AP-100/2022-P-3**, las cuales fueron aprobadas por unanimidad de votos por los Magistrados que integran el Pleno de esta Sala Superior, **en las sesiones celebradas los días veintiuno de octubre de dos mil veintidós, veintiséis de mayo y dos de junio de dos mil veintitrés, respectivamente.**

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 108, 109, 111 y 171, fracción XXII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete, en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado, número 7811, es de resolverse y se:

RESUELVE

I.- Este Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco resultó **competente** para resolver el presente recurso de apelación.

II.- Es **procedente** el recurso de apelación propuesto.

III.- Resultaron **parcialmente fundados pero insuficientes**, los agravios planteados por la recurrente; en consecuencia,

IV.- Se **confirma** la **sentencia definitiva** de fecha **diecisiete de enero de dos mil veintitrés**, dictada en el expediente **189/2020-S-1**, por la **Primera** Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en atención a lo analizado en el considerando último de esta sentencia.

V.- Al quedar firme el presente fallo, con **copia certificada** del mismo, notifíquese a la **Primera** Sala Unitaria de este tribunal y remítanse los autos del toca de apelación **AP-026/2023-P-1** y del juicio **189/2020-S-1**, para su conocimiento y, en su caso, ejecución.

Notifíquese a las partes la presente sentencia de conformidad con los artículos 17 y 18, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado vigente.- **Cúmplase**.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS **JORGE ABDO FRANCIS** COMO PRESIDENTE Y PONENTE, **RURICO DOMÍNGUEZ MAYO** Y **DENISSE JUÁREZ HERRERA**, QUIENES FIRMAN ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS **HELEN VIRIDIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, QUE CERTIFICA Y DA FE.

DR. JORGE ABDO FRANCIS

Magistrado Presidente, Ponente y titular de la Primera Ponencia.

MTRO. RURICO DOMÍNGUEZ MAYO

Magistrado titular de la Segunda Ponencia.

52

M. EN D. DENISSE JUÁREZ HERRERA

Magistrada titular de la Tercera Ponencia.

HELEN VIRIDIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Secretaria General de Acuerdos.

Que las presentes firmas corresponden a la resolución del Toca del Recurso de Apelación **AP-026/2023-P-1**, misma que fue aprobada en la sesión de Pleno celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

INLO

“... De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 3 fracción VIII y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas; 18, de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, del Estado de Tabasco y el acuerdo TJA-CT-001/2023, del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa, se indica que fueron suprimidos del documento, datos personales de personas físicas, y personas Jurídico Colectivas, como: nombre, CURP, RFC, dirección particular, cuentas bancarias y claves bancarias, edad, teléfono particular, historial médico, estado civil, deducciones salariales y deudas, correo electrónico personal, fotografías, nacionalidad, matrícula del servicio militar, pasaporte, credencial para votar, (INE); por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos...”